

Expediente: **3770/24**

Carátula: **WONG MARIA ESTER C/ TORENA MANUEL ANGEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS**

Unidad Judicial: **OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 3**

Tipo Actuación: **INTERLOCUTORIAS CIVIL CON FD**

Fecha Depósito: **30/05/2026 - 00:00**

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20245535075 - *WONG, MARIA ESTER-ACTOR/A*

20374975901 - *TORENA, MANUEL ANGEL-DEMANDADO/A*

90000000000 - *SANZOL, SERGIO ADOLFO-CAUSANTE*

23270306209 - *BERNARDINO RIVADAVIA COOP. DE SEGUROS LTDA., -CITADO/A EN GARANTIA*

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 3

ACTUACIONES N°: 3770/24



H102336191382

Juzgado Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación

JUICIO: WONG MARIA ESTER c/ TORENA MANUEL ANGEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Expte N°: 3770/24

San Miguel de Tucumán, 29 de mayo de 2026

Y VISTOS: Que se encuentra para resolver lo solicitado en estos autos caratulados: "WONG MARIA ESTER c/ TORENA MANUEL ANGEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Expte N°: 3770/24", y

CONSIDERANDO

I. Mediante presentación digitalizada de fecha 27/05/2026, el letrado Federico Agustín Cotella, en representación de la parte demandada, interpone recurso de aclaratoria, conforme lo dispuesto por el art. 764 del CPCCT, contra la sentencia definitiva referida, a fin de que se aclare un aspecto vinculado al cómputo de los intereses.

Solicita que se aclare que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina debe comenzar a devengarse recién una vez vencido el plazo de diez días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Señala que la sentencia, en el punto 7 de sus considerandos y en la parte resolutive, dispuso que, luego de la cuantificación a valores actuales, corresponde aplicar un interés del 8% anual desde el hecho hasta la sentencia y que, a partir de allí y hasta su efectivo pago, deberá aplicarse la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Agrega que también se ordenó que la indemnización sea abonada dentro de los diez días de notificada la resolución.

Funda su petición en que interpretar que la tasa activa corre desde el dictado de la sentencia de primera instancia, aun sin encontrarse firme, implicaría colocar al deudor en mora antes de que exista una obligación exigible y definitiva. Sostiene que ello afectaría indirectamente el derecho de

defensa y de recurso, en tanto durante la sustanciación de las instancias recursivas se aplicarían intereses superiores a los fijados para la etapa previa, esto es, el 8% anual.

Afirma que la mora, como presupuesto de los intereses moratorios, solo se configura una vez firme la sentencia y vencido el plazo otorgado para su cumplimiento. En ese sentido, invoca por analogía el criterio jurisprudencial local en materia de condenas pecuniarias y cita lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial Común, Sala 2, en autos "Juárez Elizabeth Marcela c/ Banco Macro S.A. s/ Sumario (Residual)", Expte. N° 2990/21, Sentencia N° 725 del 02/09/2025, en cuanto sostuvo que los intereses moratorios correspondientes a la sanción punitiva deben computarse desde que queda firme la sentencia que impone la condena o, en su caso, desde el vencimiento del plazo fijado para su cumplimiento, es decir, desde la mora, conforme criterio de la CSJT en Sentencia N° 190 del 15/03/2023.

Aclara que, si bien el precedente citado refiere al daño punitivo, entiende que el principio aplicable es idéntico, en tanto los intereses moratorios calculados a tasa activa solo proceden desde la mora, la cual no se configura sino hasta la firmeza de la sentencia y el vencimiento del plazo para su cumplimiento.

Por ello, solicita que se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de aclaratoria y que se haga lugar al mismo, disponiéndose que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina comience a devengarse únicamente a partir de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

II. Asimismo el 27/05/2026 mediante presentación digitalizada Gonzalo Peñalba Pinto, en su carácter de apoderado de Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. y también por derecho propio, solicita aclaratoria respecto de la sentencia definitiva dictada en fecha 18/05/2026.

En representación de Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., deduce aclaratoria, con fundamento en el art. 767 del CPCC, a fin de que se aclare un concepto que considera oscuro y susceptible de diversas interpretaciones en lo relativo al cómputo de los intereses.

Señala que la sentencia, en el punto 7 de sus considerandos y en su parte resolutive, establece que, luego de la cuantificación a valores actuales, corresponde aplicar un interés del 8% anual desde el hecho hasta la sentencia y que, a partir de allí y hasta su efectivo pago, deberá aplicarse la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Agrega que también se ordenó que la indemnización sea abonada en el término de diez días de notificada la resolución.

Solicita que se aclare que el cómputo de la tasa activa debe comenzar a correr recién una vez vencido el plazo de diez días desde que la sentencia quede firme o, en su caso, desde los diez días posteriores a la sentencia de segunda instancia.

Sostiene que, de no aclararse en tal sentido, podría interpretarse que la tasa activa corre desde el dictado de la sentencia de primera instancia, aun cuando esta no se encuentre firme, lo que implicaría considerar al deudor en mora antes de que exista una obligación exigible y definitiva. Afirma que ello afectaría el derecho de defensa en juicio y de propiedad de su mandante, conforme los arts. 18 y 17 de la Constitución Nacional, en tanto sostiene que aquella no reviste la calidad de deudora hasta tanto exista una sentencia judicial firme fundada en ley. Agrega que, indirectamente, también se afectaría el derecho al recurso, puesto que los intereses que correrían durante la sustanciación de las instancias recursivas, calculados a tasa activa, resultarían significativamente superiores a los fijados para los montos actualizados, esto es, el 8% anual.

Expresa que, antes de que la sentencia adquiriera firmeza, no existe incumplimiento ni mora imputable al deudor que justifique la aplicación de una tasa moratoria como la activa. En apoyo de su postura, invoca por analogía el criterio fijado por la jurisprudencia local respecto de otras condenas pecuniarias, y cita lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial Común, Sala 2, en autos “Juárez Elizabeth Marcela c/ Banco Macro S.A. s/ Sumario (Residual)”, Expte. N° 2990/21, Sentencia N° 725 del 02/09/2025, Registro N° 00076242-04, en cuanto recepitó el criterio de la CSJT según el cual los intereses moratorios correspondientes a la sanción punitiva deben computarse desde que queda firme la sentencia que impone la condena, o en su caso desde el vencimiento del plazo fijado para su cumplimiento, es decir, desde la mora, calculados conforme la tasa activa cartera general de préstamos del Banco de la Nación Argentina.

Aclara que, si bien el precedente citado refiere a la multa civil, entiende que el principio que inspira dicha solución es el mismo, en tanto el devengamiento de intereses moratorios a tasa activa solo resulta procedente desde que el obligado se encuentra en mora, lo que -según sostiene- no ocurre sino hasta que la sentencia queda firme y vence el plazo de diez días otorgado para su cumplimiento.

Por derecho propio, solicita asimismo aclaratoria en relación con los honorarios regulados, respecto de los cuales entiende que existió una omisión, por considerar que solo se practicó una regulación parcial correspondiente a la proporción en la cual su mandante resultó vencida, esto es, el 30%, y no así respecto de la proporción de la demanda que fue rechazada, equivalente al 70%, en la cual afirma haber resultado vencedor.

Sostiene que, por tal motivo, se arribaría al resultado de que su regulación sería inferior a la del letrado de la parte vencida. Invoca la doctrina que atribuye a la Cámara, conforme la cual, en casos como el presente, el pie regulatorio está dado por la totalidad del monto reclamado en la demanda, de acuerdo con el art. 39 inc. 1 de la Ley 5480. Señala que, según dicho criterio, en los procesos de daños y perjuicios la base regulatoria se encuentra constituida por el monto reclamado en la demanda, con independencia de que lo pretendido prospere total, parcial o nulamente, en tanto el trabajo profesional se refleja tanto en la admisión de lo reclamado como en su rechazo total o parcial, ya que la cuantía de lo rechazado representa una suma que el demandado evita erogar y, por ende, un beneficio mensurable atribuible a la labor del profesional que lo asiste.

Cita, en tal sentido, lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial Común, Sala 1, en autos “Díaz Lorena del Carmen c/ Maidana Lafuente Ángel Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios”, Sentencia N° 21 del 14/02/2025, Registro N° 00073358-01.

En consecuencia, sostiene que en el caso solo se reguló por la proporción por la cual la demanda prosperó y no por aquella en la cual fue rechazada y la parte actora resultó vencida. Por ello, solicita que, por vía de aclaratoria, se supla dicha omisión y se practique la regulación completa, tomando como base la totalidad del monto reclamado, incluidos los rubros y montos rechazados.

III. Entrando a resolver el pedido de aclaratoria, cabe dejar establecido que, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de nuestros Tribunales: “la aclaratoria constituye un remedio para obtener del mismo órgano jurisdiccional que dictó una resolución que subsane un error material, aclare algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión o supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Básicamente el mecanismo significa autorizar a que subsanen los déficit señalados mediante un acto que exprese la verdadera voluntad del juez, quien se pronuncia sobre los alcances de su decisión anterior, a la que integra formando un todo indivisible” (CCDLy Familia y Suc.Concep. Villafañe, R.N. vs. Sepulveda, J.C. s/cobro ejecutivo. Sallo 113, 09/11/2012).

Así, se ha dicho que la aclaratoria tiene también por objeto suplir omisiones de pronunciamiento sobre pretensiones o defensas oportunamente articuladas en el proceso. Los términos en que la norma se halla concebida autorizan a interpretar que la aclaratoria es procedente para suplir omisiones de pronunciamiento tanto sobre cuestiones accesorias (intereses y costas) cuanto sobre pretensiones principales o defensas oportunamente articuladas en el proceso (como serían, por ejemplo, la pretensión de daños y perjuicios acumulada a otra pretensión, la excepción de prescripción, etc.) (cfr. Palacio, Lino E., Manual de Derecho Procesal, T. II, pág. 81).

Sentado ello, corresponde tratar en primer término la aclaratoria deducida por Federico Agustín Cotella, en representación de la parte demandada Manuel Ángel Torena, mediante la cual solicita que se aclare que el cómputo de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina debe comenzar recién una vez vencido el plazo de diez días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

De la lectura de la sentencia definitiva de fecha 18/05/2026 surge que se dispuso expresamente que, *"corresponde aplicar un interés del ocho por ciento (8%) anual desde la fecha del hecho (06/07/2024) y hasta la fecha de la presente sentencia. Que a partir de allí y hasta su efectivo pago, deberá aplicarse la tasa activa del Banco de la Nación Argentina."* Asimismo, se ordenó que la indemnización sea abonada dentro de los diez días de notificada la resolución.

En tales condiciones, no se advierte la existencia de un error material, concepto oscuro u omisión susceptible de ser subsanada por vía de aclaratoria.

En segundo término, corresponde analizar la aclaratoria deducida por Gonzalo Peñalba Pinto, en representación de la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., quien también solicita que se aclare que el cómputo de la tasa activa debe comenzar a correr una vez vencido el plazo de diez días desde que la sentencia quede firme o, en su caso, desde los diez días posteriores a la sentencia de segunda instancia.

Al respecto, cabe señalar que el planteo formulado por la citada en garantía resulta sustancialmente análogo al efectuado por la parte demandada, en tanto ambos persiguen modificar el momento inicial del devengamiento de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina fijado en la sentencia definitiva.

Por las mismas razones expuestas precedentemente, no se advierte la existencia de un concepto oscuro, error material u omisión que habilite la procedencia de la aclaratoria. La sentencia estableció expresamente el régimen de intereses aplicable.

Finalmente, corresponde tratar el planteo formulado por Gonzalo Peñalba Pinto por derecho propio, vinculado con la regulación de sus honorarios.

Al respecto, sostiene que habría existido una omisión, por cuanto solo se habría practicado una regulación parcial correspondiente a la proporción en la cual su mandante resultó vencida, y no así respecto de la proporción de la demanda que fue rechazada, en la cual afirma haber resultado vencedor. En virtud de ello, solicita que se complete la regulación tomando como base la totalidad del monto reclamado, incluidos los rubros y montos rechazados.

Sin embargo, tampoco se verifica en este punto la existencia de un error material, concepto oscuro u omisión de pronunciamiento que habilite la procedencia de la aclaratoria, toda vez que lo requerido importa cuestionar el criterio utilizado para efectuar la regulación de honorarios y pretende obtener una modificación sustancial de la base regulatoria considerada en la sentencia. En efecto, la vía intentada no resulta idónea para revisar el acierto o desacierto de lo decidido ni para reabrir el debate sobre el modo en que fueron regulados los honorarios profesionales, ya que la aclaratoria no constituye un recurso destinado a sustituir o modificar el razonamiento jurisdiccional ya expresado,

sino un remedio excepcional y limitado para corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones sin alterar la sustancia del pronunciamiento.

Por ello, corresponde no hacer lugar al pedido de aclaratoria deducido por Gonzalo Peñalba Pinto por derecho propio.

Por ello

RESUELVO:

I. NO HACER LUGAR a la aclaratoria solicitada por el Dr. Federico Agustín Cotella, en representación de la parte demandada, conforme lo considerado.

II. NO HACER LUGAR a la aclaratoria solicitada por el Dr. Gonzalo Peñalba Pinto, en representación de la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. y por derecho propio, conforme lo considerado. ATC 3770/24

HÁGASE SABER.

Dr. Raúl Eugenio Martín Tejerizo

Juez

Juzgado en lo Civil y Comercial Común

de la XIII° Nominación

Actuación firmada en fecha 29/05/2026

Certificado digital:

CN=TEJERIZO Raul Eugenio Martin, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20217459770

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.